



JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
-SECCIÓN TERCERA-

Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2023

Juez	:	Luis Eduardo Cardozo Carrasco
Ref. Expediente	:	110013336036-2023-00396-00
Accionante	:	Julio Mario Ospina Donado
Accionada	:	Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral

ACCIÓN DE TUTELA
ADMISORIO Y AUTO QUE DECIDE MEDIDA PROVISIONAL

El señor **Julio Mario Ospina Donado** presentó acción de tutela en contra de la **Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral**, a efectos de que se protejan sus derechos fundamentales a la *información veraz, la representación legítima en conexidad con el derecho a elegir, el debido proceso y la publicidad transparente* presuntamente vulnerados, por la configuración de un presunto fraude electoral digital en las elecciones regionales del país.

Sin embargo, previo a disponerse sobre la admisión de la presente acción, el Despacho debe pronunciarse respecto de la solicitud de medida provisional solicitada en la demanda, la cual se fundamenta así:

“Medida Provisional: Ordenar la suspensión provisional de la posesión el 1 de enero de los candidato electo en las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, por haber sido el resultado de un proceso que involucra un presunto fraude electoral digital sistémico, y hasta que se confirme un conteo legítimo que refleje la voluntad ciudadana. Todo esto porque no existe un mecanismo que resulte eficaz para responder a la inmediatez que se requiere para prevenir que se ocasione el perjuicio inminente e irremediable a los derechos fundamentales ciudadanos y democráticos del VOTO Y REPRESENTACIÓN LEGÍTIMA, con la posesión el 1 de Enero de 2024, de candidatos electos con escrutinios que se han realizado con presuntos fraudes procesales que vulneraron la cadena de custodia de la información y los datos electorales digitales en los sistemas informáticos institucionales a cargo de la Registraduría.”

En efecto, el Decreto 2591 de 1991 en lo relativo a las medidas provisionales en sede de tutela, señala:

“ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere

dictado.”

Al tenor del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, se observa que *“desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”*; en este orden de ideas, lo que se pretende evitar con la adopción de la medida provisional, es que la amenaza del derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable el derecho.

Si bien es cierto la pretensión principal de la tutela busca evitar la posesión de los candidatos ganadores en las elecciones regionales celebradas el pasado 29 de octubre de 2023, debido a un presunto fraude electoral digital, situación que tendrá lugar el próximo 1º de enero de 2024, momento para el cual no se habrá vencido el término de los 10 días para proferir el fallo de fondo, la adopción de dicha medida no resulta procedente por las siguientes razones:

Lo primero que debe ponerse de presente es la ausencia de pruebas que en esta etapa procesal pudieran respaldar la orden que el accionante busca que se dicte, pues si bien, en su escrito señala un amplio caudal probatorio, este no fue aportado y ello deja sin un respaldo sólido las afirmaciones de fraude que el accionante busca demostrar en la presente acción.

En segundo término, los derechos invocados por el accionante como vulnerados por las presuntas irregularidades en el sistema de pre conteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, riñen con otros de igual rango que se encuentran en cabeza del grupo de ciudadanos que puedan considerar que con la medida de suspensión se vulneran sus derechos. Derechos que, en principio, serían defendidos por las entidades electorales que avalaron los resultados de las elecciones y que en esta etapa procesal no han sido escuchadas.

La tercera razón es que, si bien en cierto, la Corte Constitucional ha definido el carácter fundamental de algunos de los derechos aquí invocados, el sistema jurídico colombiano permite que los reclamos que el accionante ventila en la presente acción puedan ser decididos a través de otro tipo de acciones, como lo es la nulidad electoral que contempla el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. Tal circunstancia permite señalar, al menos de manera previa, que existe un juez natural definido por el ordenamiento jurídico para decidir los conflictos de orden electoral.

Ello supone que, el conocimiento del juez de tutela se torna residual frente a la existencia de una acción principal a menos que el accionante a través de las pruebas aportadas y debidamente debatidas demuestre la afectación de derechos fundamentales de orden constitucional. Evento que, con la sola lectura del escrito de la tutela no se evidencia.

Así las cosas, el Juzgado no evidencia en este estado la existencia de hechos que impliquen adoptar medidas provisionales, pues la circunstancia que expuso la accionante como fundamento para adoptarla, a juicio del Despacho no configura inminencia, gravedad y urgente atención, para obtener pronunciamiento en esta etapa prematura del trámite Constitucional, por lo que, dado que son varias las pretensiones de la acción de tutela ellas no se agotan con la posesión de los candidatos el 1º de enero de 2024.

Dado que la solicitud reúne los requisitos de ley, el Despacho,

DISPONE:

PRIMERO: NEGAR la medida preventiva solicitada por el señor **Julio Mario Ospina Donado**, por los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia

SEGUNDO: VINCULAR a la **Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y a la Universidad Nacional de Colombia** para que, si a bien lo tienen se pronuncien en los términos indicados por el accionante en el escrito de la demanda.

TERCERO ADMITIR la tutela de la referencia.

CUARTO: ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional

Electoral que publiquen en sus páginas web la información del auto admisorio y el escrito de la demanda, para que, quien crea tener interés en participar, puedan pronunciarse sobre los hechos de la acción, de lo que **deberán allegar el soporte que demuestre la publicación.**

QUINTO: NOTIFICAR por el medio más expedito la admisión de la tutela, al Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral haciéndoles entrega de copia de la tutela con sus anexos

SÉXTO: CONCEDER el término de dos (2) días, para que la Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral se pronuncien sobre los hechos de la presente acción.

SÉPTIMO: REQUERIR a las entidades accionadas para que, al momento de contestar la presente acción de tutela, especifiquen en cabeza de qué funcionario está la responsabilidad de cumplir una eventual orden derivada de las pretensiones de la demanda.

OCTAVO: La parte accionada deberá acreditar el cumplimiento a lo dispuesto en el numeral anterior, a través de mensaje de datos enviado al correo electrónico jadmin36bta@notificacionesrj.gov.co.

NOVENO: REQUERIR al señor **Julio Mario Ospina Donado** para que en el término de dos (2) días allegue los documentos relacionadas en el acápite de pruebas.

DÉCIMO: Por Secretaría del Juzgado, COMUNICAR la presente decisión al accionante, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y la Universidad Nacional de Colombia por el medio más expedito y dejar constancia en el expediente, esto es

juliomarioospina@hotmail.com
notificaciontutelas@registraduria.gov.co
cnenotificaciones@cne.gov.co
contacto@presidencia.gov.co
notificaciones_juridica_nal@unal.edu.co

DÉCIMO PRIMERO: TENER como pruebas documentales las aportadas por el accionante con el escrito de tutela.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS EDUARDO CARDOZO CARRASCO
Juez

nmma

Firmado Por:
Luis Eduardo Cardozo Carrasco
Juez
Juzgado Administrativo
036
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0b60674923c993abd23594430da10d7168cfd9cc237a8fb6349203fd3db1f170**
Documento generado en 14/12/2023 04:29:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>